



RESOLUCIÓN PA-42/2022, de 23 de junio

Artículos: 2, 5, 6, 7, 9 y 23 LTPA. 3, 6 y 8 LTBG

Asunto: Procedimiento iniciado de oficio por presunto incumplimiento de obligaciones de publicidad activa de la entidad SAMAFRAVA, S.A. en el ámbito del Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2019-2021

Expediente: PAI-13/2022

Normativa y abreviaturas: Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG)

ANTECEDENTES

Primero. Entre las funciones que el art. 48.1 LTPA atribuye a la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) figura en su letra g) la de ejercer el control de la publicidad activa de los sujetos obligados a la misma.

Con este objeto la Dirección del Consejo aprobó, con fecha 7 de noviembre de 2019, el Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2019-2020 (publicado en BOJA núm. 219, de 13 de noviembre de 2019). Asimismo, con posterioridad, mediante Resolución de 1 de diciembre de 2020 se extendió la vigencia de dicho Plan hasta el 31 de diciembre de 2021 (BOJA núm. 235, de 4 de diciembre de 2020).

Segundo. Dentro de las tres líneas en las que se estructura el mencionado Plan se inserta la Línea 3, que tiene como objeto la “[c]omprobación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre los sujetos obligados por percepción de subvenciones por importe superior a 100.000 euros”.

El protocolo aprobado por la Dirección del Área de Transparencia para el desarrollo de las actuaciones inspectoras de la Línea 3 del Plan (en fecha 1 de octubre de 2021), incluye en su ámbito subjetivo de actuación las entidades que en el periodo 2019-2020 hayan sido beneficiarias de al menos una subvención de la Junta de Andalucía por importe superior a 100.000 euros. De acuerdo con lo que dispone dicho protocolo y tras acudir a la información que la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía ofrecía a través de su Portal de Datos Abiertos en fecha 01/10/2021, se acordó consolidar la muestra en las diez sociedades mercantiles con el importe de la subvención más alto superior a 100.000 euros (cinco del tipo sociedades anónimas y cinco de responsabilidad limitada), figurando la empresa SAMAFRAVA, S.A. en cuarto lugar dentro de este primer grupo, en cuanto entidad perceptora de una subvención de la Junta de Andalucía por importe de 774.175,98 € en el ejercicio 2020.

Tercero. En el marco de las funciones investigadoras realizadas por el personal del Consejo en el curso de las actuaciones inspectoras inherentes a la citada Línea 3 del Plan, este órgano de control ha podido advertir —tras examinar la página web de la entidad señalada en fecha 2 de diciembre de 2021— la



presencia de posibles incumplimientos en relación con la información a publicar como parte de la publicidad activa que resulta exigible a la misma en virtud de lo establecido en el Capítulo II del Título I de la LTBG en relación con lo que a su vez dispone el Título II de la LTPA, en los términos que se relacionan en el siguiente cuadro:

Entidad	SAMAFRAVA, S.A.
Fecha inspección	02/12/2021
Página web examinada	www.samafrava.com
Presuntos Incumplimientos	<p>• <i>Información institucional, organizativa y de planificación</i> (Art. 6 LTBG).</p> <p>No se aprecia publicada información referente a:</p> <ul style="list-style-type: none">✗ Normativa que sea de aplicación a la entidad (Art. 6.1 LTBG).✗ Estructura organizativa y organigrama actualizado debidamente datado (fecha de elaboración y/o actualización) que identifique a las personas responsables de los diferentes órganos (nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico corporativo) junto a su perfil y trayectoria profesional (Art. 6.1 LTBG). <hr/> <p>• <i>Información económica, presupuestaria y estadística</i> (Art. 8 LTBG).</p> <p>No se localiza (o se hace de modo incompleto) información concerniente a:</p> <ul style="list-style-type: none">✗ Contratos suscritos por la entidad con Administraciones Públicas o la indicación, en su caso, de su no existencia [Arts. 8.1 a) y 8.2 LTBG].✗ Convenios celebrados por la empresa con Administraciones Públicas o la indicación, en su caso, de su no existencia [Arts. 8.1 b) y 8.2 LTBG].✗ Subvenciones y ayudas públicas recibidas de Administraciones Públicas [Arts. 8.1 c) y 8.2 LTBG].✗ Información presupuestaria o relativa a los estados financieros de la entidad que refleje los fondos públicos percibidos de Administraciones Públicas [Art. 8.1 d) LTBG].✗ Cuentas anuales que deban rendirse o la indicación, en su caso, de su no existencia [Art. 8.1 e) LTBG]. <p><i>Toda esta información es exigible desde la fecha de entrada en vigor de la LTBG (10 de diciembre de 2014), en relación con los años en los que la entidad haya percibido subvenciones o ayudas por parte de cualquier Administración Pública por un importe acumulado superior a 100.000 €.</i></p>



Cuarto. A la vista de lo anterior, con fecha 28 de marzo de 2022, el Director del Consejo acordó la iniciación del procedimiento para requerir la subsanación de los presuntos incumplimientos advertidos.

Quinto. Con fecha 4 de abril de 2022, este órgano de control notificó a la citada entidad el Acuerdo anterior otorgándole un plazo de alegaciones de veinte días en el que podría formular las alegaciones que tenga por convenientes o subsanar anticipadamente las incidencias advertidas. De igual modo, se ponía en su conocimiento que el ejercicio de esta última opción exigiría publicar la información correspondiente en la página web corporativa y comunicarlo a este Consejo, determinando, en su caso, el archivo de las actuaciones.

Sexto. El 24 de abril de 2022, tiene entrada en el Consejo escrito suscrito por representante legal de la citada mercantil efectuando las siguientes alegaciones:

“PRIMERA: La Sociedad tiene publicada en su página web la preceptiva información, según detalle siguiente:

“<https://samafrava.com/>

“Al pie de la página, en el apartado Área de Políticas:

“Link => Aviso Legal

“Al final del mismo, apartado Información transparencia pública.

“SEGUNDA: Consecuencia del Requerimiento de referencia, la Sociedad ha modificado el acceso a la preceptiva información, para facilitar aún más el acceso a la misma, según detalle siguiente:

“<https://samafrava.com/>

“Al pie de la página, figura expresamente el apartado: Información transparencia pública:

“Link => Información transparencia pública

“En su virtud y por lo expuesto,

“Solicito del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en Sevilla, tenga por presentado este escrito, lo admita, y por atendido en forma y plazo el Requerimiento de referencia”.

El escrito anterior se acompaña de la copia de un 'poder de representación procesal' otorgado por parte de la mercantil inspeccionada en favor del representante legal que suscribe las alegaciones.



FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La competencia para la resolución de este procedimiento reside en el Director del Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.3 b) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (aprobado por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre), y en el artículo 48.1 g) LTPA, en conexión con el artículo 23 del mismo texto legal.

Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del citado Decreto 434/2015, *“[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”*, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos inspeccionados en relación con la puesta a disposición de la información que les pueda ser requerida durante el transcurso de las actuaciones inspectoras.

Segundo. Como establece el artículo 2 b) LTPA, la publicidad activa consiste en *“la obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de hacer pública por propia iniciativa, en los términos previstos en la presente ley, la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública”*. Exigencia de publicidad activa que comporta que la información *“estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web”* de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley (art. 9.4 LTPA), y que tal publicación se realice *“de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada”* (art. 9.1 LTPA), garantizando especialmente que la información que se publica atiende al principio de «veracidad», de tal manera que la misma *“ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia”* [art. 6 e) LTPA].

Pero no solo constituye una obligación para las entidades sujetas al cumplimiento de la legislación en materia de transparencia. Pues, según establece el artículo 7 a) LTPA, la publicidad activa constituye igualmente un *“derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen [...] de forma periódica y actualizada la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”*.

Tercero. El procedimiento que se tramita encuentra su fundamento en que por parte de la entidad SAMAFRAVA, S.A. —en cuanto sujeto concernido por la LTBG, en base a lo previsto en el art. 5.1 LTPA en relación con el art. 3 b) LTBG— no se han satisfecho las obligaciones de publicidad activa previstas en la LTBG que se relacionan en el Antecedente Tercero, hecho que motivó la incoación (en fecha 28/03/2022) del procedimiento que ahora se resuelve para requerir la subsanación de los presuntos incumplimientos advertidos, al no poder constatarse la disponibilidad en su página web de la correspondiente información.

Con ocasión de las alegaciones presentadas ante el Consejo por la mercantil indicada, ésta ha afirmado que se encuentra publicada en su página web la preceptiva información, reseñando que se puede acceder expresamente a la misma en el apartado destinado a “Información transparencia pública”.



No obstante, tras acceder nuevamente a la página web corporativa en fecha 30/05/2022, este órgano de control ha podido advertir que persisten algunos incumplimientos de los inicialmente detectados —extremo del que se ha dejado constancia en el expediente—, tal y como se detalla en los fundamentos jurídicos siguientes.

Cuarto. En lo concerniente a la información de carácter institucional y organizativo, el art. 6.1 LTBG —al regular la información que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley como la inspeccionada deben hacer pública en sus páginas web o portales— incluye la concerniente a “...la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa”. A cuyo efecto, debe incluirse un organigrama actualizado que identifique gráficamente a las personas responsables de los diferentes órganos junto a su perfil y trayectoria profesional.

En este punto y respecto del concepto de “organigrama”, resulta necesario traer a colación el concepto del mismo que viene delimitando paulatinamente este Consejo [entre otras, Resoluciones PA-31/2017 (FJ 4º), PA-1/2017 (FJ 3º) y PA-26/2017 (FJ 5º)] y que adaptado en este caso a la naturaleza jurídica del ente denunciado, puede cifrarse en los siguientes términos: “[...] debe entenderse [por organigrama] a los efectos del [art. 6.1 LTBG] una representación gráfica de la organización de [la entidad] que permita conocer de forma fácil, sencilla y sintética, la estructura orgánica [...], los niveles de jerarquía y las relaciones existentes entre los distintos órganos [...], conteniendo, todos ellos, el nombre de sus responsables. Conforme establece el artículo 6 h) LTPA, la información a ofrecer ha de estar basada en el principio de facilidad y compresión, de suerte que la información se ofrezca de la forma más simple e inteligible posible, y ha de estar actualizado, como exige el [artículo mencionado], para lo cual deberá procederse a la datación del organigrama con el fin de que sea conocida la fecha de su realización. Respecto al alcance del organigrama, es parecer del Consejo [...] entend[er] por identificación el nombre y apellidos, así como el número de teléfono y correo electrónico corporativos...”.

Pues bien, en lo referente a la normativa de aplicación, este órgano de control ha podido constatar tras consultar la página web corporativa —concretamente, la sección que señala la empresa dedicada a “Información Transparencia Pública”—, que se encuentra publicada una amplia relación de normativa europea, estatal, autonómica y local que resulta aplicable a la actividad empresarial desarrollada por la entidad; lo que viene a confirmar el cumplimiento adecuado de la exigencia de publicidad activa en cuestión.

Por otra parte, en lo que concierne a la estructura organizativa de la empresa y a la identificación de las personas responsables de los diferentes órganos, la sección anterior permite acceder también a un organigrama corporativo debidamente datado (se señala como fecha de aprobación por la dirección la del 26/10/2021) con identificación (nombre y apellidos) de los miembros del Consejo de Administración y de las personas responsables de las diferentes áreas, si bien no figura dato alguno que permita contactar a través de teléfono y correo electrónico corporativo.

Asimismo, en lo relativo al perfil y trayectoria profesional de las personas responsables, no se distingue publicada información alguna —ni en la sección dedicada a “Información Transparencia Pública” ni en la página web en su conjunto— más allá de la posibilidad que en dicha sección se explicita de acceder a ella



solicitándola expresamente a través del teléfono o el correo electrónico que se indica. No resulta posible, por tanto, el libre acceso a esta información consultando directamente la página web, lo que viene a contravenir la exigencia de publicidad activa que, a este respecto, debe cumplimentar la empresa.

Quinto. En relación con los contratos suscritos con las Administraciones Públicas, hemos de señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 a) LTBG, la entidad inspeccionada también debe facilitar en su portal o página web la información que se describe en el mencionado artículo en los términos siguientes:

“a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente”.

Obligación que debe ser interpretada a la luz de lo dispuesto en el art. 8.2 LTBG, que circunscribe la exigencia de publicidad de la información anterior a los contratos celebrados con una Administración Pública.

Tras consultar nuevamente la repetida sección dedicada a “Información Transparencia Pública”, este órgano de control ha podido localizar la publicación de un contrato administrativo celebrado en febrero de 2020, con indicación de su objeto, fecha de celebración e importe.

Sin embargo, es necesario destacar que las obligaciones de publicidad resultaron exigibles para las entidades beneficiarias de subvenciones —como sujetos obligados en base a lo previsto en el art. 5.1 LTPA en relación con el art. 3 b) LTBG— a partir del 10 de diciembre de 2014, en virtud de lo establecido en la Disposición Final Novena LTBG, en relación con los años en los que la entidad haya resultado perceptora de subvenciones o ayudas públicas por parte de cualquier Administración Pública por un importe acumulado superior a 100.000 euros. Y en este sentido, la información que ofrece la propia página web de la entidad —como más adelante se ahondará en el Fundamento Jurídico Séptimo— permite constatar que las subvenciones de ese tipo recibidas por la empresa en el periodo comprendido entre 2015 y 2021 afectan a otras anualidades distintas a la actual (2021, por lo menos).

Sexto. Por su parte, en lo que a los convenios celebrados con Administraciones Públicas se refiere y en virtud de lo dispuesto en el art. 8.1 b) LTBG, el ente inspeccionado está obligado a facilitar en su portal o página web *“[l]a relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas”.* Obligación que, al igual que sucedía con los contratos, el art. 8.2 LTBG impone cuando se trate de convenios celebrados con una Administración Pública.

La consulta de la información que se encuentra alojada en la reiterada sección de la página web dedicada



a “Información Transparencia Pública” ha permitido advertir la siguiente reseña: “No se firmó ningún convenio en 2020”.

Efectivamente, en relación con este último aspecto, el Consejo viene subrayando la necesidad de que si se carece de la información o simplemente ésta no existe se debe dar cuenta expresa de ello en el apartado o pestaña correspondiente del portal o página web de la entidad para que, de este modo, la ciudadanía tenga la constancia expresa de que ésta es la causa que motiva la falta de publicación (entre otras, Resolución PA-117/2021, de 16 de septiembre (FJSS 5º y 6º)).

Sin embargo, la mención en la página web societaria a la inexistencia de convenios suscritos por la empresa con Administraciones Públicas con referencia exclusiva al año 2020 resulta insuficiente en aras de satisfacer el cumplimiento de la obligación de publicidad activa descrita, dado el periodo durante el cual resulta exigible proporcionar dicha información por parte de la empresa inspeccionada, según lo ya explicitado en el fundamento jurídico anterior en referencia a los contratos.

Séptimo. En cuanto a las subvenciones y ayudas públicas recibidas de las Administraciones Públicas, la entidad debe publicar, igualmente, la información relativa a las mismas, “...con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 c) LTBG. Exigencia de publicación que, en efecto, el art. 8.2 LTBG supedita también en este caso a las subvenciones que reciban entidades como la inspeccionada cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.

En relación con ello, la sección referente a “Información Transparencia Pública” permite acceder adicionalmente a información sobre un total de cuatro subvenciones otorgadas a la citada mercantil entre las anualidades 2018 y 2020, concretando los elementos de publicidad activa exigidos por la normativa de transparencia en este sentido.

Entre ellas figura la subvención que ha motivado la inclusión de la entidad en el Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2019-2021 y que se refiere en el Antecedente Segundo. Dicha información se complementa con la que se ofrece desde la página principal de la web corporativa, en la que se hace referencia (junto a la subvención anterior) a un incentivo concedido a la empresa por la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía —en el ejercicio 2021, según atestigua la consulta de la Base de Datos de Subvenciones de la Junta de Andalucía a fecha 17/06/2022—, con indicación del importe concedido (137.360 €) y su objeto o finalidad ('proyecto de ampliación de la capacidad productiva con nueva línea de bolsas en formato DOYPACK con el objetivo de conseguir un tejido empresarial más competitivo'). Se confirma, pues, el cumplimiento adecuado de la obligación de publicidad activa precitada.

Octavo. En relación con lo dispuesto en el fundamento jurídico anterior, la aplicación del art. 8.1 d) LTBG determina, igualmente, para la entidad inspeccionada la necesaria publicación de la información de carácter presupuestario que refleje los fondos públicos percibidos.

De igual modo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8.1 e) LTBG, entre la información con repercusión



económica o presupuestaria que las entidades privadas como la inspeccionada, en cuanto entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley por aplicación de lo dispuesto en el art. 5.1 LTPA, deben hacer pública en sus portales o páginas web, figura la concerniente a “[*l*]as cuentas anuales que deban rendirse...”.

En relación con ambas exigencias de publicidad activa, el análisis de la repetida sección que figura en la página web dedicada a “Información Transparencia Pública” ha permitido identificar publicadas las cuentas anuales de la citada mercantil en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, junto con los informes de auditoría emitidos por auditor independiente y las memorias normales. Asimismo, el acceso a su contenido permite corroborar la imputación contable de los fondos públicos percibidos por la empresa en este periodo.

No obstante, teniendo en cuenta que esta exigencia de publicidad activa —al igual que las analizadas con anterioridad— resulta exigible para la mercantil inspeccionada en relación con los años en los que la entidad haya resultado perceptora de subvenciones o ayudas públicas por parte de cualquier Administración Pública por un importe acumulado superior a 100.000 euros y dada la subvención recibida por la misma en el ejercicio 2021 a la que se hacía referencia en el fundamento jurídico anterior, se advierte la no presencia de información en relación con la cuenta relativa a este ejercicio. Conclusión que, obviamente, resulta igualmente predicable en relación con la información presupuestaria o relativa a los estados financieros de la entidad que refleje estos fondos.

Noveno. De los fundamentos jurídicos precedentes se desprende la presencia de cumplimientos defectuosos de algunas obligaciones de publicidad activa por parte de la entidad inspeccionada por lo que, en virtud del artículo 23 LTPA, este Consejo ha de requerir la correspondiente subsanación.

Así pues, la entidad SAMAFRAVA, S.A. deberá publicar en su página web o portal de transparencia, en los términos descritos en los fundamentos jurídicos de la presente Resolución y en los artículos de la normativa de transparencia que, a continuación, se indican, la información relativa a:

1. Datos identificativos (teléfono y correo electrónico corporativo) de las personas responsables de los diferentes órganos de la empresa incluidos en el organigrama junto al perfil y trayectoria profesional [Fundamento Jurídico Cuarto. Art. 6.1 LTBG].
2. Contratos suscritos por la entidad con Administraciones Públicas o la indicación, en su caso, de su no existencia [Fundamento Jurídico Quinto. Arts. 8.1 a) y 8.2 LTBG].
3. Convenios celebrados con Administraciones Públicas o la indicación, en su caso, de su no existencia [Fundamento Jurídico Sexto. Arts. 8.1 b) y 8.2 LTBG].
4. Información presupuestaria o relativa a los estados financieros de la entidad que refleje los fondos públicos percibidos de Administraciones Públicas en relación con el ejercicio 2021



[Fundamento Jurídico Octavo. Art. 8.1 d) LTBG].

5. Cuentas anuales que deban rendirse por la mercantil correspondientes al ejercicio 2021
[Fundamento Jurídico Octavo. Art. 8.1 e) LTBG].

Con objeto de lograr una mayor claridad en la información a ofrecer y evitar posibles dudas o equívocos ante la consulta de la misma, en el caso de que no hubiera alguna información al respecto que proporcionar, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en la sección u apartado correspondiente del portal de transparencia o página web. Asimismo, como en toda información que se ofrezca, la información objeto de publicidad habrá de datarse, con el objeto de conocer la fecha en que se pone la misma a disposición de la ciudadanía.

Todo ello teniendo en cuenta, además, los principios generales que articulan nuestro sistema de publicidad activa, entre los cuales se encuentra el de que la información *“será publicada [...] de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados”* (art. 5.4 LTBG), así como que *“la información será comprensible [y] de acceso fácil”* (art. 5.5 LTBG). También deberá garantizarse que la información que se publica atiende al principio de «veracidad», de tal manera que la misma *“ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia”* [art. 6 e) LTPA].

En fin, como recuerda la propia LTPA en su art. 9.4, la información *“estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web [...] de una manera segura y comprensible”*, debiendo fomentarse la publicación de la información en formatos que permitan su reutilización, de acuerdo con el principio de reutilización (art. 19 LTPA).

Décimo. En cuanto a la determinación de la fecha a partir de la cual es obligatorio proporcionar la información económica y presupuestaria aludida en el fundamento jurídico anterior, conviene reiterar que la referida información de publicidad activa resultó exigible para las entidades beneficiarias de subvenciones —como sujetos obligados en base a lo previsto en el art. 5.1 LTPA en relación con el art. 3 b) LTBG— a partir del 10 de diciembre de 2014, en virtud de lo establecido en la Disposición Final Novena LTBG, en relación con los años en los que la entidad haya resultado perceptora de subvenciones o ayudas públicas por parte de cualquier Administración Pública por un importe acumulado superior a 100.000 euros.

No obstante, la concreción de la fecha a partir de la cual resulta obligatorio proporcionar cada una de las informaciones sobre las que penden exigencias de publicidad activa no impide, en modo alguno, que la entidad extienda la publicidad a fechas anteriores a las mismas, e incluso esta ampliación sería recomendable en mérito de la transparencia.



En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero. Requerir expresamente a la entidad SAMAFRAVA, S.A. para que proceda a publicar en su portal o página web la información a la que hace referencia el Fundamento Jurídico Noveno.

Segundo. La información deberá estar accesible en el portal o la página web en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la presente resolución, dando cuenta a este Consejo de lo actuado en el mismo plazo establecido en el requerimiento.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este Consejo, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa.

EL DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Jesús Jiménez López

Esta resolución consta firmada electrónicamente